JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C., tres de mayo de dos mil veinticuatro

Acción de Tutela No. 110014003 007 2024 00230 01.

Resuelve el Juzgado la impugnación a que fue sometido el fallo de tutela proferido el 15 de marzo de 2024 por el Juzgado 7° Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, en la acción de tutela promovida por INVERSIONES INNOVAR DE COLOMBIA S.A, PEDRO ANTONIO GELACIO MARTÍNEZ, CARLOS HUMBERTO GELACIO MARTÍNEZ, JUAN PABLO RINCÓN GARZÓN y DIANA CAROLINA BELLO MILLÁN, contra LEIDY MARCELA MERCHAN VARGAS, BYTEDANCE LTD., TIKTOK INC. y TIKTOK PTE. LTD.

1. ANTECEDENTES

1.1. Los accionantes presentaron acción de tutela demandando la protección de sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y dignidad humana. Solicitaron que, salvaguardados los aludidos derechos fundamentales, se pida a *“la señora Leidy Marcela Merchán Vargas se retracte de la publicación realizada a través de la red social TIK TOK y aquellas que haya utilizado para la difusión”*, y consecuentemente, se pida a la señora Merchán Vargas y/o a la red social TIK TOK *“la eliminación de las publicaciones realizadas, en torno a las cuales menciona nuestros nombres completos, números telefónicos personales y nos hace responsables de un hecho punible, sin sentencia y/o proceso judicial abierto”*

1.2. Como fundamento de sus pretensiones manifestaron, en síntesis, que el 26 de febrero del año en curso, a través del perfil de TIK TOK denominado @denuncielineapurpura *“los intocables”*, la señora LEIDY MARCELA MERCHAN VARGAS, quien tuvo un vínculo laboral con la sociedad aquí accionante, realizó dos videos en los que aseguró haber sido víctima de acoso laboral y sexual por parte de Juan Pablo Rincón Merchán quien se desempeñaba como gerente de Inversiones INNOVAR, y otras empleadas por parte de los accionantes Pedro Antonio Celacio Martínez y Carlos Humberto Celacio Martínez. También indico en dichas publicaciones que Diana Bello apoyó el desconocimiento de derechos laborales (descuentos injustificados, persecución laboral, horarios extendidos, no pago de horas extras ni dominicales ni comisiones), adicionalmente, se dio a conocer sus números telefónicos. Estos videos cuentan con múltiples reproducciones en línea, además de haber sido compartidos por la plataforma WhatsApp.

El 27 de febrero de 2024, por intermedio de una empresa de servicios legales, solicitaron a la señora MERCHAN VARGAS su rectificación frente a dichas afirmaciones, sin que a la fecha (entiéndase de presentación de la tutela) se hayan eliminado, a pesar de haber realizado la denuncia correspondiente ante la plataforma TIK TOK, y a pesar de contener información personal.

Precisaron que no han sido llamados o vinculados a proceso penal ni laboral alguno. Consideran que como a la fecha las publicaciones no han sido eliminadas, persiste la transgresión de los derechos invocados.

2. EL FALLO IMPUGNADO

El Juzgado de primera instancia, destacó que para que proceda la rectificación y eliminación de las divulgaciones aquí discutidas, es necesario que exista solicitud previa de rectificación, requisito que no se encuentra probado. Lo anterior, por cuanto si bien se aportó un derecho de petición de fecha 27 de febrero de 2024 dirigido a la señora MERCHAN VARGAS a efectos de la rectificación referida, no se observa acuse de recibo de esa comunicación por parte de la destinataria; es más, si se aceptara que dicho requerimiento se presentó el mismo 27 de febrero, a la fecha de interposición del amparo (04 de marzo de 2024), es decir tan solo 3 días después, no había transcurrido el término de 15 días legales con que la señora Merchán Vargas contaba para responder la solicitud.

Tampoco se aportó prueba de haberse solicitado la rectificación o eliminación previa ante BYTEDANCE LTD., TIKTOK INC. y TIKTOK PTE. LTD, ni prueba de las publicaciones que pretenden eliminar, o acreditación de su difusión por algún canal digital.

En ese orden de ideas, no evidenció la acreditación del requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de tutela, ni vulneración y/o amenaza a los derechos invocados, por lo que negó el amparo deprecado.

3. LA IMPUGNACIÓN

3.1 Dentro del término legal, los accionantes presentaron impugnación al fallo de primera instancia, manifestando, en resumen, que la solicitud de rectificación ante las accionadas la realizó los días 28 y 29 de febrero de 2024, y aunque al momento de la presentación de la acción de tutela aún no se cumplían los 15 días para dar respuesta al derecho de petición, si habían transcurrido 17 días desde que se publicaron los videos en la plataforma TIK TOK, señalando que el amparo pretendido no es frente a la petición. Además, a la fecha de la interposición

del recurso de amparo, las publicaciones seguían vigentes, sin que hayan sido eliminadas, ni haya habido rectificación alguna.

Señalaron, que a pesar de contar con otros medios judiciales que resultan idóneos, tales como la acción penal, a través de esta tutela buscan evitar un perjuicio irremediable a su buen nombre, honra y presunción de inocencia, por lo que esta acción de tutela se torna procedente.

4. CONSIDERACIONES

4.1. La Constitución Política en su artículo 86 estableció la acción de tutela, con el objeto de que toda persona pueda reclamar en todo tiempo y lugar, mediante un procedimiento breve y sumario la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares en casos excepcionales.

4.2. El artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la solicitud de amparo procede contra particulares cuando se solicite la rectificación de informaciones inexactas o erróneas (núm.7) y respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión (núm.9)¹

En desarrollo del referido estado de subordinación o indefensión, la Corte Constitucional ha señalado que:

“(…) en las relaciones sociales, determinados individuos u organizaciones públicas o privadas ostentan posiciones de supremacía o predominio, desde las cuales agencian fines colectivos y ejercen controles recíprocos, con posibilidad de afectación de los derechos ajenos en grados que están escapando (sic) al alcance del ciudadano común”². Este tipo de poder implica una desigualdad, y en tal sentido, “la doctrina ha considerado que los medios de comunicación masiva son un poder, que, aunque sustraído del concepto tradicional del Poder Público, entra en el juego de los equilibrios, pesos y contrapesos de una sociedad”³

Bajo ese entendido, el estado de indefensión se puede presentar en la relación que existe entre un medio de comunicación y la persona involucrada en la noticia que este divulga, “en razón a que la actividad informativa que desempeñan este tipo de organizaciones, además de tener un gran alcance, en tanto llevan su mensaje a diversos sectores de la sociedad, también tiene el poder de impacto social, comoquiera que puede influir o generar determinada opinión en el conglomerado”

Esto se ha acentuado en el último tiempo, pues, ya se han superado las épocas en que eran los medios escritos y las emisiones radio difundidas, las que multiplicaban la información. Hoy la posibilidad de expandir esa misma información, al tiempo, por los canales tradicionales de otro y por la web han logrado que una emisión pueda conocerse en todo el planeta, en fracciones de minuto⁴”

---

¹ Sentencia T-200 de 2018.

² Sentencia T-219 de 2009.

³ Ib.

⁴ SU274/19

4.3. La solicitud de rectificación como requisito de procedibilidad

El numeral 7° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares, entre otros eventos, cuando se solicite la rectificación de informaciones inexactas o erróneas, caso en el cual se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de ésta. Dicha posibilidad tiene fundamento en el artículo 20 de la Carta, en virtud del cual se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad.

La rectificación ha sido definida como la garantía de que la información trasgresora sea corregida o aclarada. Según la Corte Constitucional *“...el carácter excepcional del mencionado artículo 42 hace que su interpretación deba ser estricta de manera que “si lo que busca el peticionario es que un medio de comunicación rectifique información inexacta o errónea suministrada al público, está obligado a solicitarla previamente al medio y únicamente en el evento de no ser publicada por éste en condiciones de equidad (artículo 20 de la Carta), podrá acudir al juez en demanda de tutela”⁵ .*

Bajo ese entendido, la solicitud de rectificación de la información se constituye en un requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra medios de comunicación. Esa Corporación ha explicado que la existencia del referido requisito parte de la presunción de la buena fe del emisor del mensaje, ya que *“se presume que los hechos que sustentan sus opiniones o informaciones son verificables y razonablemente contrastados”⁶ y “pretende dar al emisor de la información la oportunidad de contrastar y verificar por sí mismo si las aseveraciones de quien solicita la rectificación son ciertas o, por el contrario, si se mantiene en el contenido de la información por él difundida”⁷*

La Corte también ha reconocido que la rectificación exigible tradicionalmente a los medios de comunicación convencionales, es extensible a otros canales de divulgación de información, al señalar que *“la presentación de esta solicitud da lugar a que el periodista o el medio de comunicación – u otra persona que informe, debido a la amplitud tecnológica que hoy se presenta con recursos como el Internet -, tiene el deber de responder si se mantiene o rectifica en sus aseveraciones”⁸*

---

⁵ Sentencia SU 274 de 2019

⁶ Sentencia T-117 de 2018.

⁷ Sentencia T- 454 de 2018

⁸ Sentencia T-263 de 2010. Reiterada en la Sentencia T-117 de 2018

4.4. En el caso de estudio, pretende la parte accionante que se protejan los derechos fundamentales invocados, ordenando la rectificación y la eliminación de las presuntas publicaciones realizadas por la accionada LEIDY MARCELA MERCHAN VARGAS en la plataforma TIK TOK, relacionadas con denuncias por conductas acoso laboral y sexual, así como el desconocimiento de derechos laborales.

Al respecto, la Corte Constitucional identificó varias reglas aplicables a la rectificación en el escenario de redes sociales, así:

(i) la rectificación debe tener el mismo alcance, despliegue, difusión y tiempo de duración que la publicación reprochada; (ii) previa verificación de los hechos, el emisor del mensaje debe proceder a rectificar la información publicada en un término razonable; (iii) la carga de la prueba le corresponde a quien solicita la rectificación, salvo que se trate de afirmaciones amplias e indeterminadas, caso en el cual aquella se invierte; (iv) la rectificación se circunscribe al contenido informativo o, en su defecto, a los fundamentos fácticos en los cuales se basan las opiniones emitidas; y (v) la rectificación se constituye en la reparación constitucional de los derechos vulnerados⁹ (se subrayó)

Expuesto lo anterior, para esta judicatura no se hallaba debidamente acreditada la solicitud de rectificación como requisito de procedibilidad para el estudio de la acción de tutela. Lo anterior, por cuanto si bien, la parte accionante manifestó y allegó prueba de haber presentado ante las accionadas la petición de dicha rectificación, estos requerimiento se elevaron los días 28 y 29 de febrero de 2024, y la acción de tutela fue interpuesta el 04 de marzo de este mismo año, es decir, cuando habían transcurrido tan solo tres días hábiles desde la solicitud, sin que se observe la configuración de un tiempo prudencial o razonable para que la parte accionada procediera conforme a la rectificación solicitada, previo a la formulación del amparo constitucional.

Y, si bien la presente acción no se enmarca propiamente en la protección al derecho de petición, lo cierto es que al ejercerse la acción de tutela tan solo tres días después de la formulación de la rectificación, se desconoció ese término prudencial y razonable que establece la jurisprudencia para que la persona, o el medio de comunicación o la plataforma en cuestión verificará y analizara la información a fin de proceder o no a realizar la respectiva rectificación, antes de acudir al juez de amparo, pues sólo así, se respetaría la garantía constitucional a un debido proceso (C. Pol., art. 29). Por lo tanto, el ejercicio constitucional resultó prematuro, si se tiene en cuenta que, en efecto, frente a la petición presentada, la accionada contaba con 15 días para dar contestación a la solicitud y

---

⁹ Sentencia T-145 de 2016

dentro de ese mismo lapso razonable, adelantar la verificación de la información y proceder o no a la rectificación.

Adicionalmente, en caso de que se considere como delictiva la conducta adelantada por las accionadas, se encuentran facultados para adelantar las denuncias penales del caso, ante la autoridad judicial e investigativa competente, sin que la acción de tutela pueda ser utilizada como un mecanismo alternativo o adicional de los medios ordinarios o recursos legales dispuestos por el legislador para tal fin.

5. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, se confirmará la decisión cuestionada.

6. DECISIÓN DE SEGUNDO GRADO

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de este Distrito Capital de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución,

RESUELVE

6.1 Confirmar el fallo de tutela de fecha 15 de marzo de 2024, proferido por el Juzgado 7° Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, por lo expuesto en la parte motiva de esa decisión.

6.2. Notificar esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito.

6.3. Remitir las diligencias a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUENAS BARRETO

T- 007-2024-00230-01